

## PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No \_\_\_\_\_ DE 2022 SENADO

***“Por medio del cual se modifican los  
Artículos 119, 141, 156, 174, 178, 267, 268, 271, 272 y 273 de la Constitución  
Política de Colombia y se dictan otras disposiciones”***

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA

**Artículo 1º.** Modifíquese el Artículo 119 de la Constitución Política, el cual quedará así:

ARTICULO 119. El Tribunal de Cuentas tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración.

**Artículo 2 º.** Modifíquese el Artículo 141 de la Constitución Política, el cual quedará así:

ARTICULO 141. El Congreso se reunirá en un solo cuerpo únicamente para la instalación y clausura de sus sesiones, para dar posesión al Presidente de la República, para recibir a Jefes de Estado o de Gobierno de otros países y, para elegir Vicepresidente cuando sea menester reemplazar el electo por el pueblo, así como decidir sobre la moción de censura, con arreglo al artículo 135.

En tales casos el Presidente del Senado y el de la Cámara serán respectivamente Presidente y Vicepresidente del Congreso.

**Artículo 3 º** Modifíquese el Artículo 156 de la Constitución Política, el cual quedará así:

ARTICULO 156. La Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Tribunal de Cuentas, tienen la facultad de presentar proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones.



**Artículo 4 °** Modifíquese el Artículo 174 de la Constitución Política, el cual quedará así:

ARTÍCULO 174. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.

**Artículo 5 °** Modifíquese el Artículo 178 numeral 3 de la Constitución Política, el cual quedará así:

Artículo. 178. La Cámara de Representantes tendrá las siguientes atribuciones especiales: (...)

3. Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado, a los magistrados del Tribunal de Cuentas y al Fiscal General de la Nación.

**Artículo 6°** Modifíquese el Artículo 267 de la Constitución Política, el cual quedará así:

ARTICULO 267. El control fiscal es una función pública de naturaleza jurisdiccional que ejerce el Tribunal de Cuentas, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.

El Tribunal de Cuentas asiste al Congreso en el control de las políticas del Gobierno Nacional, de los organismos constitucionales autónomos y de las Entidades Territoriales. Asiste al Congreso y al Gobierno en el control de la ejecución del presupuesto nacional y del presupuesto de las entidades territoriales así como en la evaluación de las políticas públicas de los diferentes niveles de gobierno.

El Congreso de la República podrá solicitar al Tribunal de Cuentas la evaluación de una política pública del Gobierno Nacional o de los organismos constitucionales

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of solutions of the system of equations

which are satisfied by the functions  $u_i(x, y, z)$  and  $v_i(x, y, z)$  in the domain  $D$  of the space  $E_3$ . It is shown that the system of equations is solvable in the domain  $D$  if and only if the functions  $f_i(x, y, z)$  and  $g_i(x, y, z)$  satisfy certain conditions. These conditions are expressed in terms of the integrals of the functions  $f_i$  and  $g_i$  over the domain  $D$ .

2. In the second part of the paper the problem of the existence of solutions of the system of equations is solved for the case when the functions  $f_i$  and  $g_i$  are continuous and satisfy the conditions

which are satisfied by the functions  $f_i$  and  $g_i$  in the domain  $D$ . It is shown that the system of equations is solvable in the domain  $D$  if and only if the functions  $f_i$  and  $g_i$  satisfy the conditions

which are satisfied by the functions  $f_i$  and  $g_i$  in the domain  $D$ . It is shown that the system of equations is solvable in the domain  $D$  if and only if the functions  $f_i$  and  $g_i$  satisfy the conditions

which are satisfied by the functions  $f_i$  and  $g_i$  in the domain  $D$ . It is shown that the system of equations is solvable in the domain  $D$  if and only if the functions  $f_i$  and  $g_i$  satisfy the conditions

which are satisfied by the functions  $f_i$  and  $g_i$  in the domain  $D$ . It is shown that the system of equations is solvable in the domain  $D$  if and only if the functions  $f_i$  and  $g_i$  satisfy the conditions

which are satisfied by the functions  $f_i$  and  $g_i$  in the domain  $D$ . It is shown that the system of equations is solvable in the domain  $D$  if and only if the functions  $f_i$  and  $g_i$  satisfy the conditions

which are satisfied by the functions  $f_i$  and  $g_i$  in the domain  $D$ . It is shown that the system of equations is solvable in the domain  $D$  if and only if the functions  $f_i$  and  $g_i$  satisfy the conditions



autónomos. La solicitud deberá elevarse por el Presidente del Senado o por el Presidente de la Cámara de Representantes, por iniciativa propia o por proposición aprobada por las Comisiones Constitucionales en su respectiva área de competencias. El informe de evaluación de una política pública solicitado por el órgano legislativo, deberá presentarse por el Tribunal de Cuentas en un plazo máximo de 12 meses a partir de su solicitud.

Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los jueces de la República.

Una ley orgánica determinará el régimen de responsabilidad fiscal y contable y regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas. En todo caso, la provisión de sus miembros deberá obedecer a un sistema de carrera administrativa específico para este órgano de control fiscal, con prevalencia de los principios rectores de meritocracia, transparencia y publicidad y cumplimiento de los requisitos adicionales que la ley disponga.

**Artículo 7º** Modifíquese el Artículo 268 de la Constitución Política, el cual quedará así:

**ARTICULO 268.** El Tribunal de Cuentas tendrá las siguientes atribuciones:

1. Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas de los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse.
2. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado.
3. Llevar un registro de la deuda pública de la Nación y de las entidades territoriales.
4. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la nación.
5. Ejercer función fiscalizadora de carácter externo, permanente y consultiva, sometiendo la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia y economía en relación con la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos.
6. Ejercer jurisdicción fiscal y contable sobre las pretensiones de responsabilidad que, desprendiéndose de las cuentas que deben rendir todos cuantos tengan a su cargo el manejo de recursos públicos y parafiscales, se deduzcan contra los mismos cuando, con dolo, culpa o negligencia graves, originaren menoscabo en



dichos recursos o efectos a consecuencia de acciones u omisiones contrarias a las leyes reguladoras del régimen presupuestal y de contabilidad que resulte aplicable a las entidades del sector público o, en su caso, a las personas privadas que reciban créditos y recursos de cualquier naturaleza procedentes de dicho sector.

7. Ejercer jurisdicción coactiva sobre la responsabilidad deducida de la responsabilidad fiscal y contable.

8. Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado.

9. Presentar al Congreso de la República un informe anual fiscal sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente.

10. Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. El Tribunal de Cuentas bajo su responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios.

11. Presentar proyectos de ley relativos al régimen del control fiscal y a su organización y funcionamiento.

12. Proveer mediante concurso público los empleos de su dependencia que haya creado la ley. Esta determinará un régimen especial de carrera administrativa para la selección, promoción y retiro de los funcionarios.

13. Controlar la contabilidad de los partidos políticos y de los movimientos significativos de ciudadanos.

**Artículo 8º** Modifíquese el Artículo 271 de la Constitución Política, el cual quedará así:

ARTICULO 271. Los resultados de las indagaciones preliminares adelantadas por el Tribunal de Cuentas tendrán valor probatorio ante la Fiscalía General de la Nación y el juez competente.

**Artículo 9º** Modifíquese el Artículo 272 de la Constitución Política, el cual quedará así:

ARTÍCULO 272. El Control Fiscal de naturaleza jurisdiccional de los departamentos, distritos y municipios corresponderá a las Cámaras Departamentales de Cuentas y se ejercerá en forma posterior.

Los órganos de control fiscal territoriales podrán promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales,





disciplinarias o fiscales, contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado.

La conformación y elección de las Cámaras Departamentales de Cuentas, así como los órganos de control fiscal territoriales, serán establecidas mediante la Ley orgánica que reglamente la nueva estructura del sistema fiscal colombiano, garantizando autonomía administrativa y presupuestal para el ejercicio de sus funciones y de manera especial para la evaluación de las políticas públicas de las entidades territoriales.

La auditoría de las políticas públicas de las entidades territoriales incluye un control financiero y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales, conforme a los métodos de auditoría que prescriba el Tribunal de Cuentas.

**Artículo 10º** Modifíquese el Artículo 273 de la Constitución Política, el cual quedará así:

ARTICULO 273. A solicitud de cualquiera de los proponentes, las autoridades de control fiscal competentes, ordenarán que el acto de adjudicación de una licitación tenga lugar en audiencia pública.

Los casos en que se aplique el mecanismo de audiencia pública, la manera como se efectuará la evaluación de las propuestas y las condiciones bajo las cuales se realizará aquella, serán señalados por la ley.

**Artículo 11º.** Modifíquese la expresión "Contraloría General de la República" por "Tribunal de Cuentas" en los artículos 117, 178, 187 y 274 de la Constitución Política.

**Artículo 12º.** Elimínese el artículo 274 de la Constitución Política de Colombia.

**Artículo 13º.** Vigencia. Este Acto Legislativo rige a partir de su promulgación y deroga todas aquellas normas que le sean contrarias.

**Artículo Transitorio.** Los funcionarios actuales de la Contraloría General de la República y de las contralorías territoriales, que a la fecha de entrada en vigencia de este acto legislativo ostenten o tengan los derechos de carrera administrativa, serán incorporados a la planta de personal del Tribunal de Cuentas y/o las Cámaras Departamentales de Cuentas, en cargos de igual o superior jerarquía que se creen, sin exigírseles requisitos adicionales a los ya acreditados.



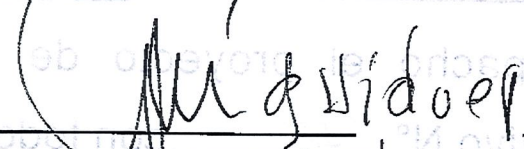


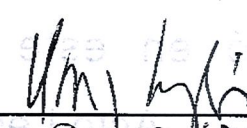
**Artículo Transitorio.** Las Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales quedarán suprimidas una vez entrada en vigencia la ley orgánica que reglamente el Tribunal de cuentas y las Cámaras Departamentales de Cuentas, la cual deberá ser expedida por el Congreso de la República dentro del año siguiente a la expedición del presente acto legislativo.

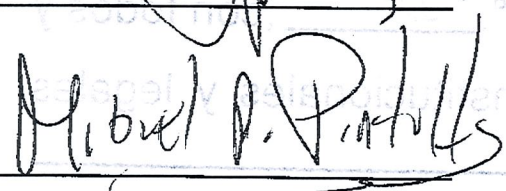
De las y los congresistas,

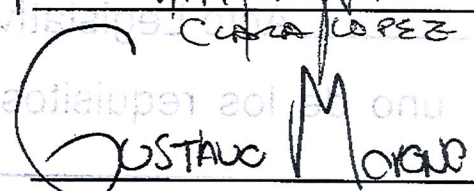
  
ROY BARRERAS  
Senador

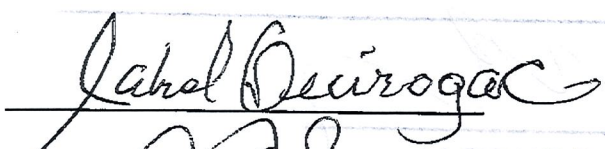
  
Juan Cereza

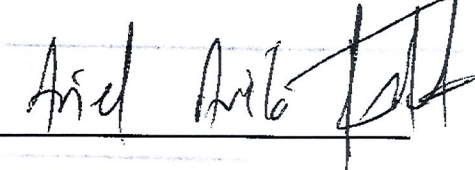
  
Miguel Vidoe

  
Clara López

  
Miguel P. Parilla

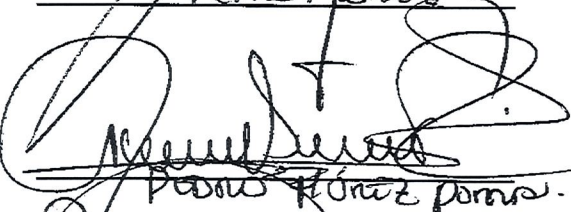
  
Gustavo Morán

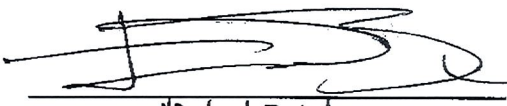
  
Rafael Quiroga

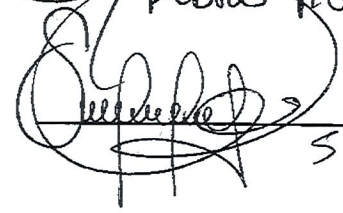
  
Ariel Arbo

  
Pedro Alonzo

  
Esmeralda Hernández S.

  
Pedro R. Ríos

  
Isabel Zola

  
Sandra Jarrés

# SENADO DE LA REPUBLICA

Secretaría General (Art. 139 y ss Ley 5ª de 1.992)

El día 1 del mes \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_

se radicó en este despacho el proyecto de ley  
Nº. \_\_\_\_\_ Acto Legislativo Nº. 20, con todos y  
cada uno de los requisitos constitucionales y legales  
por: \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
SECRETARIO GENERAL

## EXPOSICION DE MOTIVOS

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No \_\_\_\_\_ DE 2022 SENADO

***“Por medio del cual se modifican los  
Artículos 119, 141, 156, 174, 178, 267, 268, 271, 272 y 273 de la Constitución  
Política de Colombia y se dictan otras disposiciones”***

### I. ANTECEDENTES

Esta propuesta de reforma constitucional que se presenta ante el Congreso de la República ha venido estudiándose desde 2016, fecha en la que el legislativo ha contado con la activa participación de la academia para la promoción de diversos debates y análisis sobre la necesidad, viabilidad e impacto jurídico, económico y político de la creación del Tribunal de Cuentas dentro del sistema de control fiscal del país. Pese a que dicha iniciativa fue archivada por cumplimiento de los términos legales en el procedimiento legislativo, en esta nueva legislatura se presenta a consideración del Congreso de la República, conforme a la fundamentación que se expone a continuación.

### II. OBJETO DEL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO

La creación del Tribunal de Cuentas tiene como propósito darle eficiencia y eficacia al ejercicio de los ejes misionales de la vigilancia y control sobre el gasto público y la ejecución de las políticas públicas, con plena aplicación de los principios de transparencia y publicidad en la gestión pública, de manera particular en la lucha del estado Colombiano contra la corrupción.

En este sentido, la reforma constitucional pretende modificar la estructura actual del control fiscal en Colombia ejercido por la Contraloría General de la República y la Auditoría General, creándose un Tribunal de Cuentas, desconcentrado a nivel nacional, que haga parte de la Rama Judicial y tenga mayor independencia, autonomía y capacidad técnica para el ejercicio de sus funciones.

### III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Como resultado de la Misión Kemmerer en 1923, el Presidente Pedro Nel Ospina firmó la Ley 47 del 19 de Julio de ese mismo año en la cual se adoptó en





Colombia un sistema híbrido de control fiscal que sustituyó al tricentenario Tribunal de Cuentas creado en 1604 por iniciativa del Rey Felipe III. De esa forma, se sustituyó al mencionado Tribunal por el denominado "Departamento de Contraloría".

El Congreso colombiano, inspirado en las conclusiones establecidas por el norteamericano Edwin Walter Kemmerer, diseñó un nuevo sistema de control fiscal en virtud del cual se adopta la figura de Auditoría General, propia de las familias jurídicas anglosajonas, donde le corresponde al Parlamento elegir a la cabeza de dicha Auditoría que debe realizar una gestión de vigilancia y rendición de cuentas sobre la forma en que se ejecutan los recursos públicos.

Sin embargo, al reemplazarse al extinto Tribunal de Cuentas, también se incluyó dentro de las competencias del nuevo Departamento de Contraloría, un poder sancionatorio que debía ser, necesariamente, de carácter administrativo en razón a que se eliminaba el poder jurisdiccional del antiguo Tribunal de Cuentas.

En ese sentido, los fallos fiscales pasaban de ser sentencias derivadas del poder jurisdiccional a convertirse en actos administrativos sujetos del ejercicio del derecho de contradicción que recae sobre dichas decisiones de la administración. Al respecto, el artículo 7o de la Ley 42 de 1923 estableció que: *"Toda decisión del Contralor o del Auditor Seccional, tomada dentro de sus respectivas facultades, será obligatoria para todos los empleados y funcionarios administrativos a que ella se refiera; pero podrá apelarse de tal decisión por el que se crea agraviado con ella, dentro de un mes, contado desde la notificación de la providencia recurrida, ante el Consejo de Estado si se tratare de una decisión del Contralor General, y ante éste, si la decisión proviniere del Auditor Seccional"*.

De esa manera, la Ley incurrió en un error frente a la conservación de la estructura del sistema fiscal colombiano, con el diseño de la figura de la Contraloría General, al sustituirse una Corte de Cuentas, con función jurisdiccional especializada, que se erigía como Corte de cierre respecto a los asuntos fiscales, por un órgano cuyos actos administrativos tenían la vocación de ser recurridos ante el Consejo de Estado, que, a saber, no es experto en régimen de cuentas o fiscales y cuyos fallos se basan en la aplicación de los principios y reglas del derecho administrativo.

En ese orden de ideas, la construcción del híbrido en el control fiscal permitía de entrada una flexibilización innecesaria de su función, al someter las decisiones del nuevo organismo, en última instancia, a la confirmación de la decisión por parte del Consejo de Estado. Dicha flexibilización resulta ser permisiva con la



corrupción, justamente por la ineficiencia del diseño institucional que se consideró desde entonces y que se ha mantenido a pesar de algunos cambios menores en la Constitución Política de 1991 y del desarrollo de la Ley 42 de 1993.

En ese sentido, cabe recordar lo manifestado por la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción que señaló que: “La corrupción en los últimos 20 años ascendió al 4% del Producto Interno Bruto (PIB)” Lo cual demuestra la ineficiencia del sistema actual del Control Fiscal en su lucha contra este flagelo.”

Si bien es cierto, los fenómenos de corrupción obedecen a múltiples factores sociales que no dependen solo de la estructura del Estado, también lo es que el Sistema Democrático implica un equilibrio de pesos y contrapesos, así como unas facultades jurisdiccionales definidas estrictamente y ampliamente diferenciadas de las meras decisiones administrativas del sector público, y ello implica que la arquitectura institucional del estado en cuanto a sus órganos de control deben propender por la real autonomía e independencia de las demás ramas del poder público, que permitan brindarle mayor transparencia en el ejercicio de su función jurisdiccional de vigilancia y control a la gestión fiscal.

En consecuencia, este Proyecto de Acto Legislativo aboga por una reforma institucional de fondo que permita el renacimiento de un organismo como el Tribunal de cuentas, conforme a la influencia y tradición del sistema jurídico romano-germánico, en aras de la eficiencia de la gestión fiscal de la nación.

Por su parte, el último estudio investigativo de la Universidad de los Andes, publicado por la Escuela de Gobierno en junio de 2022, denominado: “*Las “ías”, entes de control y fiscalía en cifras: politización e ineffectividad en la gestión pública entre múltiples capas de control*”, recomendó un análisis profundo y una eventual reforma sobre los procesos de elección de las cabezas de los entes de control, Erick Behar-Villegas, Pablo Sanabria-Pulido, Paul J. Hasselbrinck-Macias (2022), al tiempo que afirmó que: “*De acuerdo con diferentes autores, un rasgo clave para que los órganos de control funcionen adecuadamente es precisamente la importancia de asegurar su independencia de actores e intereses políticos (Speck, 2011; Potoski, 1999). La existencia de arreglos institucionales y pesos y contrapesos que impidan la captura por parte de partidos, actores políticos, o grupos de interés es crítica para garantizar la efectividad de su rol como mecanismo facilitador de la transparencia y de control de la gestión. Incluso para balancear la competencia entre las ramas por el control de la burocracia (Clinton et al., 2014; Lamb y Nye, 2012) y resolver el problema de los múltiples principales*





*que se puede dar en la búsqueda por el mayor nivel de control (Moe, 2012; Ríos-Cazárez, 2010).”<sup>1</sup>*

De cara a lo expuesto, resulta oportuno tener en cuenta la importancia de todos los esfuerzos del Estado, en este caso del legislativo, por lograr disminuir los índices de corrupción en la administración pública, la cual tiene consecuencias directas en el desarrollo del país, y tal como lo indica el Fondo Monetario Internacional, una mejora de un (1) punto porcentual en el índice de corrupción de Transparencia Internacional, tendría un impacto de 0,8% en el Producto Interno Bruto (PIB), por lo que esta iniciativa resulta ser de gran importancia para la viabilidad del país que queremos construir, con una estructura institucional que facilite los procesos de la gestión pública de manera efectiva y transparente.

En consecuencia, el articulado presentado a consideración de los ciudadano(a)s Congresistas, establece el diseño y la metodología para la elección de los miembros del Tribunal de Cuentas, en la que prevalece el mérito, la transparencia y la publicidad, así como sus funciones, cuya esencia es el control jurisdiccional – como organismo de cierre– del Gasto Público y la Gestión Fiscal a nivel Nacional, Departamental y Municipal, las cuales pasan a describirse a continuación:

#### **IV. Funciones del Tribunal de Cuentas propuesto**

El Tribunal de Cuentas que propone este proyecto de acto legislativo, asumirá las funciones que constitucionalmente están asignadas a la Contraloría General de la República, en la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de particulares o entidades que manejen bienes o fondos de la nación.

La constitución del Tribunal de Cuentas garantiza:

##### **1. Autonomía e independencia**

Este proyecto de Acto Legislativo otorga al Tribunal de Cuentas una competencia Jurisdiccional, de forma tal que se constituye como un eslabón medular en la Rama Judicial en relación a la posibilidad de controlar efectivamente el gasto público de la Administración.

---

<sup>1</sup> *Erick Behar-Villegas, Pablo Sanabria-Pulido, Paul J. Hasselbrinck-Macias (2022). Universidad de los Andes. Junio de 2022. “Las “ías”, entes de control y fiscalía en cifras: politización e ineffectividad en la gestión pública entre múltiples capas de control”*





En ese orden de ideas, al contar con un Tribunal de Cuentas especialista en asuntos fiscales, se garantiza la imparcialidad técnica y el ponderado juzgamiento del ejercicio del gasto público gubernamental, por medio de sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada.

## **2. La expedición de un nuevo régimen de responsabilidad fiscal.**

El régimen fiscal actual regulado en la Ley 610 de 2000 y sus correspondientes modificaciones, no garantiza plenamente los principios de seguridad jurídica y debido proceso en razón a que está basado en un modelo de juzgamiento inquisitivo, en virtud del cual le corresponde al mismo funcionario que inicia el trámite del proceso de responsabilidad fiscal recaudar las pruebas y proferir el fallo declarando la responsabilidad fiscal del indiciado, lo que va en contravía de la necesidad de procesos de investigación y juzgamiento separados, independientes, que garanticen imparcialidad en la decisión de sanción o absolución del indiciado.

De esta forma, no existe la construcción de imparcialidad propia de los regímenes de control fiscal en donde debe primar el sistema adversarial de juzgamiento, sistema en el cual el funcionario que imputa la responsabilidad fiscal es diferente de quien juzga y decide si efectivamente dicha responsabilidad existió.

El Tribunal de Cuentas permitirá construir un sistema adversarial en donde pueda dividirse el trabajo de imputación y juzgamiento fiscal en Salas separadas, de manera tal que pueda garantizarse cabalmente el debido proceso en esta Corporación de cierre sobre asuntos fiscales.

Así pues, una vez constituido el Tribunal de Cuentas podrá expedirse un nuevo régimen de responsabilidad fiscal que permita establecer de forma clara y precisa, un sistema de tipificación fiscal que garanticen el principio de legalidad absoluta, garantizando así la mayor transparencia posible en los distintos procesos fiscales que se adelanten contra los presuntos responsables.

## **3. Descongestión de la Jurisdicción Administrativa.**

La creación de un Tribunal de Cuentas con funciones jurisdiccionales permitirá descongestionar a la jurisdicción contenciosa administrativa de todas las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, formuladas contra los actos administrativos en los cuales se demandan los distintos fallos de responsabilidad fiscal de las Contralorías, por quienes fueron encontrados responsables fiscalmente.

The first of these is the fact that the  
the second is the fact that the  
the third is the fact that the

the fourth is the fact that the

the fifth is the fact that the  
the sixth is the fact that the  
the seventh is the fact that the  
the eighth is the fact that the  
the ninth is the fact that the  
the tenth is the fact that the

the eleventh is the fact that the  
the twelfth is the fact that the  
the thirteenth is the fact that the  
the fourteenth is the fact that the

the fifteenth is the fact that the  
the sixteenth is the fact that the  
the seventeenth is the fact that the  
the eighteenth is the fact that the

the nineteenth is the fact that the  
the twentieth is the fact that the  
the twenty-first is the fact that the  
the twenty-second is the fact that the

the twenty-third is the fact that the

the twenty-fourth is the fact that the  
the twenty-fifth is the fact that the  
the twenty-sixth is the fact that the  
the twenty-seventh is the fact that the  
the twenty-eighth is the fact that the  
the twenty-ninth is the fact that the  
the thirtieth is the fact that the

Así pues, al expedirse una sentencia por el Tribunal de Cuentas como máximo organismo de cierre fiscal en ejercicio de sus competencias jurisdiccionales, no existirá otro recurso que el acatamiento de dicho fallo.

De igual forma, es necesario que por medio de una ley de la República se regule la conformación del Tribunal de Cuentas y se regule un mecanismo de segunda instancia al interior del mismo Tribunal con el objetivo de garantizar el debido proceso en los procesos que se adelanten ante este organismo.

#### **4. El ejercicio de un control político eficaz.**

Una de las funciones principales del Tribunal de Cuentas será asistir al Congreso de la República en el ejercicio de su función de control político, en relación al diseño y ejecución de políticas públicas lideradas por la Administración. Así pues, el Tribunal tendrá como función coadyuvar al Congreso auditando la ejecución del gasto, rindiendo un informe anual y varios informes a solicitud, para garantizar mayor transparencia y solidez en el control fiscal y seguimiento que realiza tanto el Senado como la Cámara de Representantes de las diversas políticas implementadas por el ejecutivo.

#### **5. La desconcentración del ejercicio de control fiscal.**

El control fiscal que se realizará a nivel del Tribunal de Cuentas, órgano de cierre del control fiscal, el cual será desconcentrado en Cámaras Departamentales y Municipales de Cuentas cuya auditoría y tutela estará en cabeza del Tribunal de Cuentas. De esta forma se evitan los conflictos competenciales entre la Contraloría General de la República y las Contralorías Departamentales o Municipales, por cuanto se sustituye un modelo de descentralización del control fiscal por un modelo de desconcentración.

Ahora bien, al ser una desconcentración judicial, implica que el Tribunal de Cuentas goza de una jerarquía de carácter funcional sobre las Cámaras Departamentales y Municipales, siguiendo el modelo jerárquico de la Rama Judicial. De suerte que, los fallos fiscales proferidos por las Cámaras de Cuentas territoriales serán autónomos, contarán con una segunda instancia y serán sujetos al control rogado ante el Tribunal de Cuentas Nacional.

#### **6. Desaparición de la Auditoría General de la República**

La Auditoría General de la República se constituye como un órgano de vigilancia del control fiscal en virtud del artículo 274 de la Constitución Política<sup>1</sup>,

The first part of the paper discusses the importance of the study and the objectives of the research. It also provides a brief overview of the methodology used in the study.

The second part of the paper presents the results of the study. It includes a detailed description of the data collected and the analysis performed. The results are presented in a clear and concise manner, with appropriate use of tables and figures.

### Conclusion

The conclusion of the study is that the results of the research are significant and provide valuable insights into the topic. The findings suggest that there is a need for further research in this area, and the results can be used to inform policy and practice. The study also highlights the importance of the methodology used and the need for rigorous research practices.

The study was funded by the National Science Foundation and the Department of Education.

The authors would like to thank the following individuals for their assistance and support during the course of the study: [Names of individuals]. The authors also acknowledge the contributions of the research assistants and the participants in the study.

The data for this study were collected from a national survey of [Topic]. The survey was conducted by the [Organization] and the results are available in the [Source]. The authors used the data to conduct a series of analyses to test the hypotheses of the study.

The study was approved by the Institutional Review Board at [Institution].

The authors have no conflicts of interest to declare. The study was conducted in accordance with the ethical standards of the Institutional Review Board at [Institution].



reglamentado por el Decreto Ley 272 del año 2000. Dentro de sus funciones se encuentra: "Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal, en forma excepcional, sobre las cuentas de las contralorías municipales y distritales, sin perjuicio del control que les corresponde a las contralorías departamentales, previa solicitud del gobierno departamental, distrital o municipal; de cualquier Comisión Permanente del Congreso de la República; de la mitad más uno de los miembros de las corporaciones públicas territoriales o de la ciudadanía, a través de los mecanismos de participación ciudadana que establece la ley. Este control no será aplicable a la Contraloría del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá".

Así las cosas, las funciones de la Auditoría General se circunscriben a la vigilancia de la gestión de la Contraloría General de la República. Así las cosas, en este proyecto de acto legislativo se propone sustituir el sistema de "vigilancia de la vigilancia", disminuyendo la burocratización innecesaria del control fiscal.

La creación del Tribunal de Cuentas con funciones jurisdiccionales hace que la Auditoría General de la República desaparezca, por cuanto ya no sería necesario todo un aparato administrativo que vigile su gestión como órgano de control fiscal; en tanto, dicha función le correspondería al órgano natural de vigilancia de la función jurisdiccional, esto es, el Congreso de la República a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Por lo anterior, las partidas presupuestales destinadas a la "vigilancia de la vigilancia" o a la vigilancia del control fiscal, podrán ser invertidas adecuadamente en el control fiscal en cabeza de un Tribunal especializado para dicho efecto con mayores atribuciones competenciales y fortaleza jurisdiccional.

Al ser la máxima cabeza del Sistema de Control Fiscal y, por su naturaleza jurisdiccional, los magistrados que lo integren gozarán del fuero que para el efecto tienen las otras Altas Cortes de nuestro país.

## **V. CONTEXTO INTERNACIONAL**

A nivel internacional es importante revisar algunos antecedentes en el ejercicio de la función del control fiscal que se le ha encargado a Tribunales de Cuentas, como por ejemplo:

En España:

- Es el Órgano establecido por la Constitución de 1978 cuyas principales funciones son la fiscalización del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable.



Así lo establece el texto constitucional: Está compuesto por 8 órganos así: El Presidente; El Pleno; La Comisión de Gobierno; La Sección de Fiscalización; La Sección de Enjuiciamiento; Los Consejeros de Cuentas; La Fiscalía y La Secretaría General. Así pues, hay 12 Consejeros de Cuentas, uno de los cuales será el Presidente y otro el Fiscal.

- Este Tribunal de Cuentas tiene la posibilidad de expedir Resoluciones, en virtud de las cuales se realiza el ejercicio de fiscalización de la gestión pública.

En Francia:

- La Corte de Cuentas o "Cour des comptes" en Francia fue creada en 1807 por Napoleón. Tiene tres funciones principales: Consultiva, Jurisdiccional y Control Fiscal. Está compuesta por un presidente y siete cámaras con competencias sectoriales.
- La Corte de Cuentas presenta un informe anual al Parlamento frente al control de gastos fiscales de la Administración Nacional. Asimismo, según la Constitución Política Francesa, la Corte de Cuentas asiste al Parlamento en el control de la ley de finanzas aprobada por este último. (Ver artículo 136 de la Constitución Española de 1978. Artículo 19 de la Ley Orgánica 2 de 1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.)  
Artículo 21 de la Ley Orgánica 2 de 1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. Artículo 47-2 de la Constitución del 4 de octubre de 1958.<sup>2</sup>
- La Corte tiene competencia para controlar a toda persona que haya intervenido en el manejo del presupuesto público, evaluando la eficacia de los servicios y organismos del Estado. De igual forma, tiene la posibilidad de evaluar la gestión administrativa de las Empresas Públicas.

---

<sup>2</sup> "La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens. Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.





### III. En Italia

- La Corte de Cuentas italiana se instituyó en 1862 de acuerdo al modelo de la "Cour des comptes" francesa, en virtud de la cual se instituye un Tribunal con funciones jurisdiccionales y de control. Se divide en tres cámaras: Cámara responsable de la Auditoría y dos Cámaras con funciones Jurisdiccionales.
- Las funciones de control se agrupan en 3 tipologías: Control Preventivo, Control de las gestiones y Control financiero. En el marco de estas funciones, hay controles de actos individuales de quienes ejercen gasto público en el marco de su función administrativa, así como de políticas o gestiones enteras del gobierno extensivo a parámetros o criterios generales sobre buenas prácticas administrativas.<sup>3</sup>
- Una función importante que hace simbiótica la relación del Parlamento con la Corte de Cuentas, es el informe que debe rendir este último al primero cada cuatro meses sobre el avance de hacendario en materia de presupuesto aprobados por el cuatrimestre anterior.
- De esta manera, en el informe se debe realizar una evaluación técnica sobre la racionalización del gasto. Así, a modo de ejemplo, la Corte de Cuentas rinde informes relevantes sobre sectores de especial interés como la gestión financiera de las Universidades Públicas.

---

<sup>3</sup> Artículo 100 de la Constitución Italiana de 1948. "Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela dell'igiustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, neicasi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Statocontribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo."

Staderini Francesco. El Modelo de fiscalización de Italia. Disponible en: [http://web.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/chi\\_siamo/presidente\\_staderini/cittx\\_del\\_mexico\\_28\\_settembre\\_2005\\_intervento\\_staderini.pdf](http://web.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/chi_siamo/presidente_staderini/cittx_del_mexico_28_settembre_2005_intervento_staderini.pdf).



## CONCLUSIÓN

La pretensión del proyecto de acto legislativo en mención es combatir efectivamente la corrupción, a través de una reforma a la estructura institucional fiscal y una revisión al régimen de responsabilidad fiscal en el cual se basan los funcionarios que hacen parte de la actual Contraloría general, para adelantar procesos de responsabilidad fiscal que conlleven efectivamente a las sanciones que deben tener quienes incurren en conductas que atentan contra el erario.

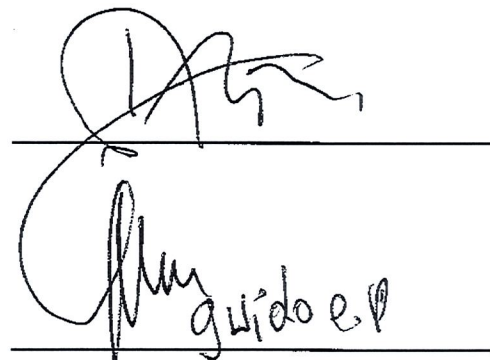
De esta forma, se evidencia actualmente que quienes ejercen el control fiscal, solo pueden proferir fallos a través de actos administrativos que son impugnados ante la jurisdicción administrativa, que, al no ser especializada en asuntos fiscales, falla en derecho administrativo y tiene la potestad de eliminar las determinaciones de responsabilidad fiscal establecidas por la Contraloría.

Con la creación de un Tribunal de Cuentas, esta posibilidad se elimina, por cuanto se constituye como órgano jurisdiccional de cierre, especializado en asuntos fiscales, con la facultad de proferir sentencias definitivas con carácter de cosa juzgada.

Así pues, el combate contra la corrupción tendrá herramientas más sólidas para establecer diversas responsabilidades a quienes ejercen funciones fiscales, con prevalencia del interés público, del principio de mérito, transparencia y publicidad en la conformación y elección de sus miembros a través de la implementación de un sistema de carrera especializado, con respeto del debido proceso en las decisiones jurisdiccionales y autonomía e independencia de las demás ramas del poder público, lo que garantiza en mayor medida un efectivo ejercicio del control fiscal tanto nacional, como territorial.

De las y los congresistas,

  
**ROY BARRERAS MONTEALEGRE**  
Senador

  
Guido E. P.



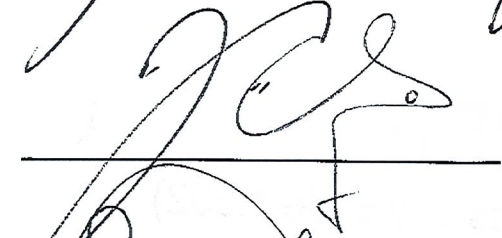


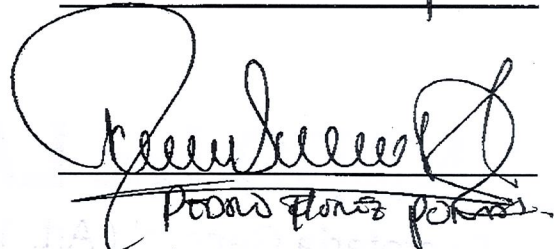
Umylyti

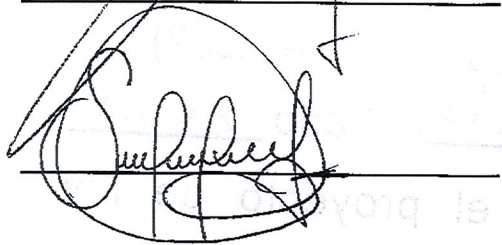
Gustavo Morán H

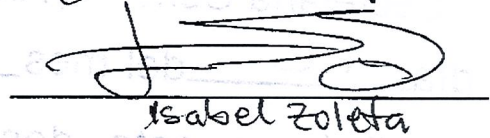
Isabel Guiragor

Arnel Arla ~~folia~~



  
Poco a poco poco a poco



  
Isabel Zolota

SECRETARIO GENERAL

# SENADO DE LA REPUBLICA

Secretaría General (Art. 139 y ss Ley 5ª de 1.992)

El día 18 del mes Agosto del año 2022

se radicó en este despacho el proyecto de ley

Nº. \_\_\_\_\_ Acto Legislativo Nº. 20, con todos y

cada uno de los requisitos constitucionales y legales  
por: \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
SECRETARIO GENERAL